

Capítulo 16

Multicrimen y degradación ambiental en Colombia: prioridades para la seguridad ambiental

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602595.16>

Jeovanny Enrique Duque Ossa
José Luis Santos Mojica
Livio Germán Castillo Villarreal
Javier Francisco Martínez Sinties

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Resumen: Colombia es un país que ha estado enfrentando importantes retos relacionados con la delincuencia y la degradación ambiental. La delincuencia ha sido un problema persistente durante décadas. La degradación ambiental también es un problema importante; sobre todo, en lo relativo a la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación. Gran parte de este tipo de degradación se debe a actividades ilegales como la minería ilegal, la tala de árboles y la producción de drogas ilícitas. Los grupos armados ilegales también han contribuido a tal situación. Se sabe que estos grupos utilizan los recursos naturales del país para financiar sus actividades, lo que provoca importantes daños ambientales. Este capítulo se centra en identificar los impactos que las organizaciones multicrimen causan en el medio ambiente y la degradación de este que fomentan.

Palabras clave: seguridad ambiental, biodiversidad, securitización, Colombia, Fuerzas Militares colombianas

Jeovanny Enrique Duque Ossa

Arquitecto constructor, Universidad Nacional. Especialista, Gerencia Integral de Proyectos, Escuela de Ingenieros. Especialista, Patología de la Construcción, U. Santo Tomas. Especialista, Prospección, U. Externado. Estudiante CAEM 2023, Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". Contacto: jeovanny.duque@esdeg.edu.co

José Luis Santos Mojica

Capitán de Navío, Armada de México. Magíster, Administración de Personal, Centro de Estudios Superiores Navales. Ingeniero hidrógrafo, Heroica Escuela Naval Militar. Diplomado, Gobierno Abierto y Participativo, Tecnológico de Monterrey. Diplomado, Economía de Defensa, y diplomado, Economía de Defensa Estratégica, Universidad O'Higgins, Chile. Contacto: jose.santos@esdeg.edu.co

Livio Germán Castillo Villarreal

Coronel de la Policía Nacional de Colombia. Administrador de Empresas, Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN). Administrador policial, Escuela de Cadetes "General Francisco de Paula Santander". Especialización, Gestión Territorial de la Seguridad, y Especialización en Seguridad, Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (ESPOL). Comandante de la Región de Policía N.º 1 y de la Región Metropolitana de Policía La Sabana (E). ORCID: Contacto: livio.castillo@correo.policia.gov.co

Javier Francisco Martínez Sinties

Estudiante CIDENAL 2023, Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".

Citación APA: Duque Ossa, J. E., Santos Mojica, J. L., Castillo Villarreal, L. G., & Martínez Sinties, J. F. (2023). Multicrimen y degradación ambiental en Colombia: prioridades para la seguridad ambiental. En E. A. Salamanca Rodríguez & J. A. Serpa Hernández (Eds), *Seguridad humana y construcción de patria en defensa de la vida* (pp. 437-454). Sello Editorial ESDEG. <https://doi.org/10.25062/9786287602595.16>

SEGURIDAD HUMANA Y CONSTRUCCIÓN DE PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA

VOLUMEN II: SEGURIDAD SANITARIA, AMBIENTAL Y PERSONAL

ISBN impreso: 978-628-7602-53-3 (obra completa)

ISBN digital: 978-628-7602-57-1 (obra completa)

ISBN impreso: 978-628-7602-55-7 (Volumen II)

ISBN digital: 978-628-7602-59-5 (Volumen II)

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602595>

Colección Seguridad y Defensa

Sello Editorial ESDEG

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2023



Introducción

La degradación ambiental y las actividades delictivas son problemas interrelacionados que plantean importantes retos para el desarrollo sostenible y la seguridad ambiental de Colombia. Los recursos naturales existentes en el país, y que incluyen bosques, ríos y ecosistemas marinos, así como los minerales, la flora y la fauna, han sido objeto de explotación, degradación y contaminación. Esto ha provocado graves problemas medioambientales, tales como la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación del aire y de cuerpos de agua. En los últimos años, se reconocen cada vez más los vínculos entre la degradación ambiental y las actividades de organizaciones multicrimen dedicadas a la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres. Estas actividades no solo dañan el medio ambiente, sino que también amenazan la seguridad humana y la estabilidad social.

Como lo señala la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, de las Naciones Unidas (2005), la degradación ambiental tiene que ver con cambios en los ecosistemas que socavan la capacidad del sistema para proporcionar servicios críticos para el bienestar humano. Ese deterioro del entorno natural causado por varias de las actividades humanas ya mencionadas, como la deforestación, la contaminación, la explotación indebida de recursos, la sobrepesca y el cambio climático, puede conducir a una pérdida de biodiversidad, de servicios ecosistémicos y de la capacidad del medio ambiente para sustentar la vida humana. Algo relevante es que la degradación ambiental es una cuestión no solo ambiental, sino también, social y económica, ya que puede tener importantes repercusiones en la salud humana, los medios de subsistencia y el bienestar de la población.

En Colombia, existen vínculos bien documentados entre las organizaciones multicrimen y la degradación del medio ambiente. Uno de los ejemplos

más notables es la conexión entre el narcotráfico y la deforestación. Las organizaciones de narcotraficantes —en especial, las dedicadas a la producción de cocaína— han estado ligadas a la tala de grandes extensiones de bosque para dar paso a las plantaciones de coca. Esta deforestación no solo destruye importantes hábitats y su biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático, al liberar en el ambiente el carbono almacenado en los árboles. Por otra parte, también hay evidencias de la degradación ocasionada por la minería ilegal. Muchas organizaciones multicrimen implicadas en esta actividad, no reparan en los daños que ocasionan en los cuerpos de agua al contaminarlos con sustancias químicas tóxicas como el mercurio y el cianuro, ni en los daños que causan a los ecosistemas y el hábitat de la fauna y la flora. Las organizaciones de delincuencia múltiple también han sido vinculadas al comercio ilegal de fauna y flora silvestres en Colombia. El tráfico de especies silvestres —en particular, el de jaguares, loros y tortugas— es un negocio lucrativo, en el que a menudo se venden animales a compradores de Asia y Estados Unidos. Este comercio puede llevar al agotamiento de las poblaciones de fauna silvestre y perturbar importantes procesos ecológicos.

Esos delitos contra el medio ambiente suelen ser ejecutados por redes delictivas y grupos armados, que se aprovechan de algunos factores particulares de la geografía y de la falta de presencia estatal para evadir la aplicación de la ley, para así captar rentas ilícitas a partir de la explotación de los recursos ambientales. Por eso, este capítulo, partiendo de los *estudios en seguridad*, emplea como punto de partida la pregunta: *¿Cómo las organizaciones multicrimen en Colombia impactan en el medio ambiente generando, por una parte, su degradación y, por otra, la degradación de las condiciones de seguridad?* El objetivo es comprender mejor los mecanismos de captura de rentas ilegales que emplean estas organizaciones, enunciando los impactos que sus acciones tienen en el medio ambiente, para identificar posibles soluciones a la degradación ambiental desde la perspectiva de la seguridad ambiental.

El papel de la seguridad ambiental a la hora de abordar estos retos cobra cada vez más importancia en el país. La seguridad ambiental se refiere, entre otros aspectos, a la protección del medio ambiente frente a las amenazas a su estabilidad, integridad y funcionamiento, incluidas las derivadas de las actividades delictivas. La seguridad ambiental en Colombia implica a múltiples actores, entre los que se incluyen entidades estatales, la Fuerza Pública, la sociedad civil y el sector privado. Dichos actores deben trabajar de manera conjunta y

coordinada para desarrollar e implementar políticas y estrategias para prevenir, mitigar y abordar esos impactos asociados al multicrimen y la degradación ambiental. La Fuerza Pública ha desempeñado un papel muy importante en la seguridad ambiental en Colombia; sobre todo, en las zonas afectadas por el conflicto armado y las actividades ilegales. Las Fuerzas Militares (FF. MM.) y de Policía han participado en la protección de parques nacionales, la supervisión de actividades medioambientales y la provisión de seguridad en zonas afectadas por delitos medioambientales. Pese a ello, existen importantes retos para prevenir la degradación de los servicios ecosistémicos en el país y fortalecer los flujos de recursos y la construcción de capacidades de los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas medioambientales.

Por lo anterior, el presente capítulo se estructura en cuatro secciones. En la primera se describe qué se entiende por *organizaciones multicrimen* y cuáles de las actividades que estas desarrollan son las que generan degradación de los servicios ecosistémicos en el país. En la segunda sección se presentan cuáles son los principales impactos que dichas actividades ocasionan en el medio ambiente, y se describe, lo más detalladamente posible, la degradación ambiental que producen. En la tercera sección se identifican algunas acciones que, desde la perspectiva de la seguridad ambiental, pueden desarrollarse para prevenir estos impactos, y se señalan algunos de los posibles roles que las FF. MM. y de Policía pueden cumplir para apoyar la acción de las instituciones del Estado encargadas de la materia. Finalmente, en la última sección se presentan algunas reflexiones finales y conclusiones.

Las organizaciones multicrimen y sus actividades

Las organizaciones multicrimen en Colombia han estado implicadas en diversos delitos contra el medio ambiente, incluyendo la deforestación, la minería ilegal, el tráfico de animales y el robo de petróleo de los oleoductos. Además, dichas organizaciones han sido acusadas de asesinar a líderes ecologistas y dañar el medio ambiente. A modo de ejemplo, la cuenca del Amazonas se ha visto especialmente afectada por grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), al dispararse las tasas de deforestación. El Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que la tasa de deforestación en Colombia creció casi en el 2 % entre 2020 y 2021, con 174.103 hectáreas de bosque destruidas (IDEAM, 2021).

Los vacíos legales en la normativa medioambiental han presentado una ventana de oportunidad para los actores criminales que han buscado saquear distintas regiones del país con prácticas ambientalmente deplorables. Además de estos delitos, los GAO y GDO se han visto implicados en prácticas extensivas de ganadería ilícita, siembra de cultivos ilícitos y minería ilegal, que han contribuido al deterioro del medio ambiente y a la destrucción de hábitats. Estos grupos también han participado en graves agresiones al medio ambiente, como el uso de productos químicos tóxicos en operaciones mineras ilícitas. En general, la implicación de organizaciones de delincuencia múltiple en delitos contra el medio ambiente constituye un reto crítico para los objetivos medioambientales de Colombia. Capturar y procesar a los principales responsables de esos delitos es una tarea ardua. En esta sección se busca dar cuenta del fenómeno y describirlo de manera general registrando algunas de sus prácticas.

El concepto *multicrimen* ha sido implementado a lo largo de los últimos años en Colombia desde los estamentos de seguridad de la nación; sin embargo, no es un término oficial o aceptado por la Academia Real Española, pero, desde la óptica de las palabras compuestas, se observa que es producto de la unión de dos palabras simples: *múltiple* y *crimen*, lo cual lleva a un contexto de crímenes de diferente tipo. Empero, socialmente se lo considera un concepto que hace referencia a la evolución, de distintas formas, de las empresas criminales vistas como mafias, lo cual se relacionaría con el crimen organizado. Por ello, tratar de construir una definición al respecto es clave para el desarrollo de este trabajo.

Definición de Organización multicrimen

De acuerdo con la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana "Garantías para la vida y la paz 2022-2026", cuando se habla de organizaciones multicrimen, se hace alusión a

[...] aquellas organizaciones nacionales y transnacionales con presencia y con vínculos en el país, que amenazan constantemente la vida y el ejercicio libre y pleno de los derechos ciudadanos, tanto en territorios rurales como urbanos, y se caracterizan por la comisión de una multiplicidad de crímenes y delitos. (MDN, 2023, p. 4)

En este sentido, el factor más importante cuando se caracteriza el accionar de este tipo de organizaciones reside en la capacidad de estas para lucrarse de múltiples actividades ilegales desarrolladas de manera convergente. Se puede afirmar que la *convergencia criminal* se da de diferentes formas. Por un lado, se presenta cuando distintas organizaciones construyen alianzas, temporales o permanentes, que les permiten compartir recursos, territorio o conocimientos específicos para el desarrollo de su accionar delictivo. Otra forma se da a partir de la coordinación a la hora de cometer delitos. Es el caso cuando organizaciones criminales se unen para desarrollar acciones delictivas complejas. La convergencia también puede verse impulsada por la globalización, ya que las organizaciones criminales pueden operar en múltiples países y colaborar a escala internacional en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas o el lavado de dinero. Sin embargo, la de mayor interés para este capítulo es cuando una organización diversifica sus actividades delictivas ocupándose de múltiples tipos de crímenes al mismo tiempo. El más claro ejemplo son organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, además de la extorsión, el secuestro y el robo, se dedican al cultivo, procesamiento y comercialización de drogas ilegales, así como a la deforestación o a la minería ilegal.

El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego (2022-2026) también ha señalado que las actividades del multicrimen se constituyen en una de las grandes amenazas para la seguridad de la sociedad, al promover la violencia en las regiones. De hecho, considera que "las rentas criminales despuntan como el mayor problema de seguridad en el presente y mediano futuro" (MDN, 2023, p. 15). En este sentido, una de las características más relevantes de las organizaciones multicrimen es la capacidad para reemplazar a sus propios líderes de jerarquía intermedia o alta que son muertos o capturados por la Fuerza Pública. Esto les da la posibilidad de mantener una oferta diversa de servicios criminales y una red de clientes que va desde los proveedores de insumos hasta quienes lavan los recursos derivados de sus actividades ilícitas (MDN, 2023). A su vez, todo eso también les da la capacidad para disputar el control sobre territorios apartados de la geografía nacional, buscando ejercer control social y la explotación de las economías criminales.

Organizaciones multictipos y rentas ilegales

La *Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional* (en inglés, GIATOC, por las iniciales de Global Initiative against Transnational Organized Crime), elabora el índice global de crimen organizado (en inglés, Ocindex, por las iniciales de Organized Crime Index)¹. En el perfil para 2023 del Ocindex, Colombia contabiliza un puntaje de 7,75, que la sitúa como el segundo país con mayor incidencia del crimen organizado transnacional (COT) en el mundo, y el primero en el continente americano (GIATOC, 2023). Entre las actividades criminales que caracterizan a las organizaciones multictipos en el país están el tráfico de personas y migrantes, el contrabando de diversos tipos de bienes —entre ellos, armas, licores y cigarrillos—, la extorsión, el boleteo y la explotación de los recursos medioambientales, entre otras. Dentro de estas últimas, el perfil resalta que “las organizaciones criminales colombianas se dedican a la deforestación principalmente mediante prácticas extorsivas”, y señala a las disidencias de las FARC y al ELN como los principales responsables. Estas organizaciones también dañan tierras para aprovechar otras “economías ilegales como la minería, el cultivo de coca y la ganadería, que se utiliza como modalidad para el blanqueo de dinero”. (GIATOC, 2023).

Otras fuentes de captura de rentas ilegales ligadas al medio ambiente por parte de las organizaciones de COT en Colombia son: el tráfico de animales salvajes, el cual aprovecha el mercado negro que suplente la demanda, sobre todo, de Europa; la minería ilegal de oro, que es, quizá, el delito más lucrativo en Colombia; la minería ilegal de otros metales, como el coltán y el wolframio; el comercio de esmeraldas, que “ha sido históricamente un bastión de la mafia y muy utilizado como herramienta de blanqueo de dinero”, y el comercio ilegal de petróleo y de gasolina, como insumo para la producción de cocaína, y el cual genera daños en oleoductos que terminan degradando el medio ambiente (GIATOC, 2023).

De manera evidente, la producción y comercialización de drogas ilícitas como, la marihuana, el clorhidrato de cocaína y la heroína se constituyen en, quizás, los crímenes que más contribuyen a las finanzas de las organizaciones multictipos en el país. Colombia se posiciona como el mayor productor de clorhidrato de cocaína en el mundo y uno de los principales productores de cannabis en la región. En 1993, un informe de Fedesarrollo (1993) contabilizaba las

¹ El Ocindex mide la criminalidad y la resiliencia de cada país en una escala de 1 a 10. Las puntuaciones de criminalidad de los países se componen de la media de diez mercados delictivos y cuatro tipos de actores delictivos (Ocindex, 2023).

actividades ilegales, y estimaba que los bienes y servicios ligados a dichas actividades representaban alrededor del 3 % del producto interno bruto (PIB) del país. De acuerdo con el diagnóstico de la política para la lucha contra el comercio de drogas ilícitas lanzada en septiembre de 2023 por el gobierno del presidente Petro, esa cifra estaba en alrededor de 2,9 % del PIB para 2019, y según eso, había alcanzado algo así como 31.000 millones de pesos para el mismo año (MinJusticia, 2023). Un artículo de *El Nuevo Siglo* (2020) estimaba que para 2020 las ganancias por tráfico de madera ascendían a cerca de 760 millones de dólares al año. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, replicando cifras de la Policía Nacional, señalaba que en abril de 2022 el tráfico ilegal de vida silvestre movía alrededor de 20.000 o 40.000 millones de euros en el mundo (MinAmbiente, 2022). En general, las actividades ilícitas que aprovechan los recursos naturales y degradan el medio ambiente se caracterizan por producir retornos altos con rentas ilegales que financian a las organizaciones multicrimen a escala nacional e internacional.

Organizaciones multicrimen y degradación ambiental en Colombia

En el tomo 5 *Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos, y resistencias del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Hay futuro si hay verdad*, al discutir sobre los impactos a la naturaleza en el conflicto interno, se plantea una reflexión profunda sobre los daños originados por los actores ilegales al instalar sus campamentos y establecer sus corredores estratégicos en zonas donde se alteró profundamente a la naturaleza. Esto significó, entre otras, "la transformación del paisaje y la destrucción de los elementos bióticos que sustentan su funcionalidad ecosistémica" (Comisión de la Verdad, 2022). Las FARC y el ELN utilizaron áreas de parques naturales para ocultar a los secuestrados, abrieron carreteras sin autorización, traficaron drogas y armas y modificaron las características propias de los territorios, transformando el paisaje.

De hecho, Daza (2018), citando a Molano (2012), resalta cómo las FARC aprovechando los asentamientos campesinos con ideologías liberales que se asentaron en la zona de la Sierra de La Macarena, se asentaron en la zona y constituyeron allí una de sus zonas de retaguardia estratégica, lo cual afectó el medio ambiente al sembrarse en sus predios dispositivos explosivos

improvisados y desarrollarse en la región fuertes combates para mantener el control sobre esta. Por su parte, el ELN, posicionado en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela y Colombia y Ecuador, ha tenido una relación directa con la degradación del medio ambiente al ser una de las organizaciones que más han atacado los oleoductos en ambas regiones (Corredor, 2022). Como ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registraron, entre 1986 y 2015, al menos 1.339 acciones armadas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas (FIP/CODHES, 2020). Regiones como El Catatumbo se han visto afectadas por esos derrames; sobre todo, desde la perspectiva sanitaria (Méndez & Zapata-Rivera, 2021).

En general, son múltiples los efectos, en múltiples regiones, los de la acción de organizaciones criminales de todo tipo: las disidencias, las bandas criminales, el crimen organizado transnacional, el ELN, etc. (Indepaz, 2020). El multicitrimen, dentro de sus actividades delictivas, ha desarrollado actividades para el procesamiento y venta de coca, lo cual involucra tala de árboles y quema de bosques y selvas en la Amazonía, la Orinoquía, los Andes tropicales y Chocó, situación que empeora con el uso de plaguicidas, fungicidas, abonos y herbicidas que posteriormente usa el Gobierno para la erradicación de los cultivos ilícitos, y los cuales afectan no solo la salud humana, sino el medio ambiente, por la contaminación del suelo y del agua (Llerena, 2016).

Situación actual del deterioro a causa de la deforestación ocasionada por organizaciones multicitrimen

La presencia de grupos armados en diferentes zonas del país, además de afectar a la población colombiana, deja daños en los ecosistemas, al transformar los medios de producción, las actividades productivas y el entorno ambiental, así como al modificar el uso del suelo y de los bosques, y por la implementación de actividades económicas ilícitas, entre las cuales se encuentra la tala indiscriminada de individuos arbóreos, o deforestación.

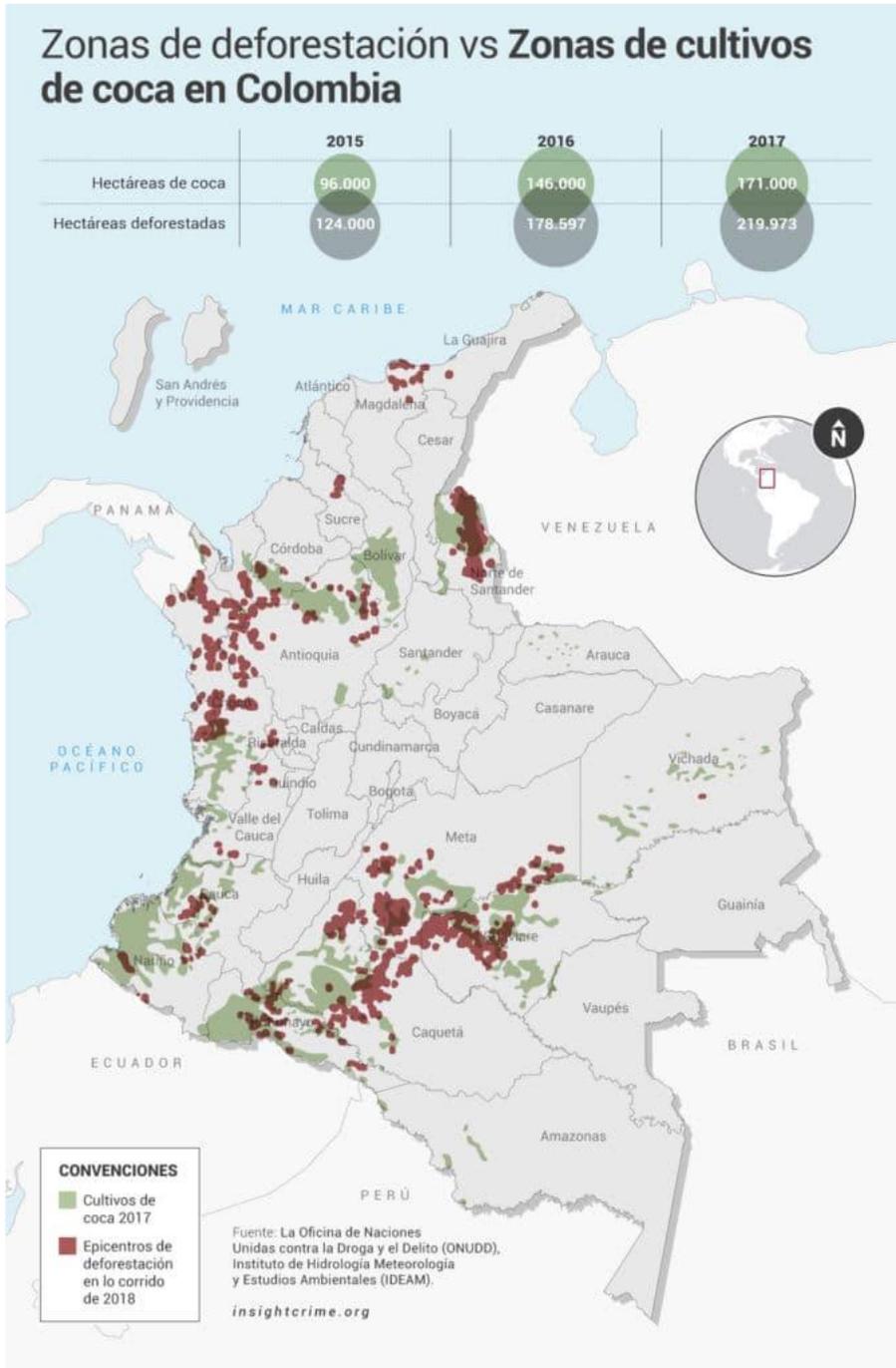
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un árbol por cada tres personas, dado que estos generan espacios sociales y ambientales en las poblaciones (Gómez & Velásquez, 2018); sin embargo, en ciudades como Bogotá se tiene un árbol por cada siete personas, y pese a la existencia de campañas de siembra en las zonas urbanas del país, la deforestación en Colombia cada día aumenta, más y más. Esto se ha dado a partir de malas prácticas, así como de la

comercialización ilegal de madera, de la sustitución por cultivos de coca y de la minería ilegal de oro por aluvión, entre otras. El Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés, WWF por las iniciales de World Wildlife Fund) informó que entre enero y marzo de 2022, se deforestaron 50.400 hectáreas en Colombia, y un acumulado de los últimos 21 años superior a los 3.000.000 de hectáreas, lo que puede ser considerado una verdadera crisis ambiental (WWF, 2022). El informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables del IDEAM para 2016 mencionaba que las principales causas o tipos de deforestación ilegal se enmarcan en la deforestación por cultivos de coca y la deforestación asociada a la minería de oro aluvión. Se encontró que el 26,7 % de la deforestación identificada en todo el territorio nacional se encuentra a menos de 1 km de los lotes de cultivos de coca detectados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en inglés, UNODC, por las iniciales de United Nations Office on Drugs and Crime) y por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) en 2016. El 95 % de la deforestación asociada a cultivos de coca se concentró en ocho departamentos; los más afectados fueron: Norte de Santander (41 %), Nariño (18 %), Putumayo (15 %), Antioquia (8 %), Meta (6 %), Cauca (3 %), Guaviare (2 %) y Caquetá (2 %) (IDEAM, 2016).

Para 2016, la deforestación en municipios históricamente asociados a la minería de oro de aluvión también registró un aumento; sobre todo, en Nechí, Remedios, Segovia, Montecristo, Timbiquí, Quibdó y Medio Atrato (IDEAM, 2016).

La deforestación les sirve a las organizaciones de crimen organizado en Colombia, al ser un mecanismo para el aumento de ingresos ilícitos; principalmente, por el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico. Según Kjelstad y Puerta (2019), en 2017 estas actividades originaron 200.000 hectáreas de deforestación. En concordancia con lo anterior, en 2018 el IDEAM e InSight Crime publicaron el mapa de los principales actores criminales en la deforestación en Colombia, al igual que el mapa donde se correlacionan las zonas de deforestación con las zonas donde se evidencian cultivos de coca en Colombia (Kjelstad & Puerta, 2019), como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Zonas de deforestación vs. zonas de cultivo de coca.



Fuente: Kjelstad y Puerta (2019).

Situación actual del deterioro de cuerpos de agua que afecta su uso para consumo humano

La actividad criminal en Colombia ha tenido, en los últimos años, un impacto significativo en la degradación de los páramos y la producción natural de agua. Los páramos son ecosistemas únicos que actúan como reguladores de los ciclos hidrológicos y son fuente de agua para muchas comunidades en Colombia. La minería ilegal, la deforestación, la circulación y otras prácticas de las organizaciones multicrimen son algunas de las actividades que han afectado los páramos y la producción natural de agua en Colombia (Basto, 2017; López, 2022). Además, el conflicto armado ha tenido un impacto en la calidad del agua en los municipios colombianos (Mosquera, 2018). La contaminación del agua está impactando cada vez más las aguas de Colombia y dañando sus ecosistemas, lo que expone a entre 11,8 y 19 millones de personas en Colombia a riesgos muy altos, por la mala calidad del agua (Banco Mundial, 2020).

El agua es una víctima del conflicto, y en algunos casos (en el 40 % de ellos), la justificación para este; así, el recurso hídrico es una víctima silenciosa, lo que refleja la afectación a su calidad y acceso (Quevedo & Walteros, 2019), por lo que el agua en las zonas de conflicto se halla generalmente contaminada, por la ausencia de alcantarillado y la mala disposición de residuos (arrojados a ríos, quebradas y al mar), lo que lleva, igualmente, a la contaminación de agua para el consumo humano (EFEverde, 2022). El deterioro de la calidad del agua en cuerpos de agua se mide a través del cálculo del Índice Riesgo de Calidad de Agua (IRCA), el cual, a través de información de las características físico-químicas y microbiológicas, calcula las condiciones del agua y si esta es apta para el consumo humano (Mosquera, 2018). Para ello, Mosquera propone un modelo empírico que correlaciona el conflicto armado y la calidad del agua en los municipios de Colombia; así, evidencia en sus estudios que los municipios donde se ha vivido conflicto armado presentan mayor riesgo en la calidad de agua, y se ven beneficiado, con sus indicadores IRCA, cuando el Estado ha actuado en ellos (Mosquera, 2018).

Así mismo, es importante tomar en cuenta que actividades como la minería ilegal, el ataque a infraestructura petrolera y la instalación de válvulas no autorizadas en la red de oleoductos generan múltiples afectaciones sobre la calidad del agua e imposibilitan su consumo; tan solo en 2015, se presentaron 20 atentados efectivos a oleoductos que generaron derrame de petróleo, con un acumulado, entre 2015 y junio de 2022, de 2.133 incidentes (Arias, 2017).

Seguridad ambiental y prevención de la degradación ambiental

La seguridad ambiental, para el presente capítulo, se aborda como lo hace Lavaux; es decir, como la conexión entre degradación ambiental, escasez de recursos, desarrollo económico e inestabilidad política, todo lo cual lleva a conflictos de tipo ambiental, terrorismo ecológico y conflictos esmeralderos denominados *guerras verdes* (Lavaux, 2004). Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la definición de seguridad ambiental tiene su origen en la Carta Mundial para la Naturaleza, adoptada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la Resolución N.º 37/7 de 1982.

En ese orden de ideas, se ve la seguridad ambiental como un lineamiento que provee herramientas e instrumentos que llevan a la evaluación, control y prevención frente a las amenazas existentes y venideras sobre los ecosistemas, y que llevan a la pérdida y agotamiento de la naturaleza. Por eso, la seguridad ambiental se correlaciona con la degradación ambiental, por cuanto trata de devolver al ciudadano la calidad del ambiente reduciendo la escasez de recursos y los efectos negativos sobre el desarrollo económico y la estabilidad política.

La degradación ambiental puede conducir a la escasez de recursos, lo que, a su vez, puede provocar conflictos por los recursos. Por ejemplo, en zonas donde escasea el agua, las comunidades pueden luchar por el acceso a los recursos hídricos, lo que puede desembocar en conflictos violentos (Khagram, 2006). A partir de la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación, se genera estrés ambiental, que tiende a exacerbar las privaciones económicas y los trastornos sociales. Esto puede provocar conflictos por los recursos y exacerbar los conflictos existentes (Party, 2000). El resultado más palpable derivado de los impactos producidos por las actividades criminales que afectan al medio ambiente es el cambio climático. La seguridad de las comunidades se ve afectada por las diversas repercusiones que están teniendo los cambios en temperatura y en los patrones de circulación atmosférica y oceanográfica, la acidificación de los océanos, la lluvia ácida y la cada vez más frecuente ocurrencia de emergencias.

En este contexto resulta de vital importancia comprender los impactos que tiene la degradación ambiental en posibles violaciones de los DD. HH., como el derecho al agua y al aire limpios. Por tanto, la seguridad ambiental va estrechamente vinculada a los DD. HH., ya que proteger el medio ambiente es esencial para proteger los DD. HH. (Akram, 2015). En esta dimensión, es claro, entonces,

que la seguridad ambiental también va estrechamente vinculada al desarrollo sostenible, ya que la degradación del medio ambiente y la escasez de recursos pueden socavar los esfuerzos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Por tanto, abordar las privaciones medioambientales se hace esencial para un desarrollo sostenible (Akram, 2015).

Existen varias iniciativas en Colombia que están luchando contra la degradación ambiental producida por las organizaciones criminales. Dichas iniciativas incluyen la nueva política de seguridad y convivencia, algunas leyes y regulaciones, una unidad especializada en la Fiscalía, una especialidad explícita de la Policía y la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para erradicar el delito ambiental en Colombia y proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas. A continuación, se presentan algunas de esas medidas.

Colombia ha implementado una nueva política de seguridad que pone en primer plano la lucha contra la deforestación. Sin embargo, esta política enfrenta varios desafíos, como la captura y enjuiciamiento de los principales actores responsables de la deforestación, y que a menudo aprovechan actividades de sectores económicos importantes, como la ganadería y el cultivo de palma, para encubrirse (MinDefensa, 2023). Igualmente, el país ha desarrollado un marco normativo (con leyes y regulaciones) para combatir el delito ambiental. Las regulaciones ambientales se han centrado tradicionalmente en la emisión de permisos y licencias para la gestión y el uso de los recursos naturales, pero estas no han tenido un impacto real en la erradicación del delito ambiental. Ello ha dado oportunidades a los actores criminales que buscan saquear la Amazonía colombiana (InSightCrime, 2021).

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación cuenta con la Dirección Especializada contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y la Policía Nacional de Colombia ha desplegado un número significativo de oficiales de inteligencia criminal e investigación en una estrategia para combatir los delitos ambientales en el país, incluyendo la deforestación, la minería ilegal, el robo de petróleo de los oleoductos y el tráfico de flora y fauna (MinDefensa, 2023).

La implementación del acuerdo de paz en Colombia incluye compromisos para abordar el delito ambiental y la deforestación. Esto involucra crear un sistema de monitoreo y verificación de la deforestación, implementar planes de restauración de tierras y promover prácticas agrícolas sostenibles (Crisis Group, 2021).

Reflexiones y conclusiones

Las organizaciones multicrimen afectan el medio ambiente y el desarrollo en Colombia, debido a que, junto con otros grupos armados ilegales y las bandas criminales, hacen presencia y ejercen control funcional de manera significativa en algunas zonas de Colombia. Su presencia y sus actividades ilícitas, que incluyen el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles, tienen un impacto negativo en el desarrollo del país. Estas organizaciones generan un clima de inseguridad, al afectar la inversión extranjera, el turismo y la creación de empleo en las regiones afectadas, y generar, por tanto, afectación sobre el desarrollo sostenible.

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y una gran extensión de bosques tropicales. Sin embargo, las organizaciones multicrimen contribuyen significativamente a la deforestación en el país. La tala ilegal de árboles para la extracción de madera, la expansión de cultivos ilícitos y la minería ilegal son actividades que dañan los ecosistemas forestales y amenazan la biodiversidad. La deforestación también aumenta la vulnerabilidad al cambio climático y la pérdida de servicios ecosistémicos clave.

Por otra parte, las organizaciones multicrimen suelen disputarse el control de territorios ricos en recursos naturales, como áreas forestales, reservas naturales y yacimientos minerales. Dichos conflictos generan violencia, desplazamiento de comunidades locales y daños a la infraestructura. Además, la explotación ilegal de recursos naturales por parte de esas organizaciones impide que el Estado colombiano pueda ejercer un control adecuado sobre dichos recursos, lo que afecta la gestión sostenible y el aprovechamiento responsable de tales recursos.

Las actividades ilegales de las organizaciones multicrimen, como la minería ilegal, suelen ir acompañadas de prácticas irresponsables que generan contaminación y daños ambientales. El uso de mercurio en la minería ilegal contamina los cuerpos de agua, y ello afecta la salud de las comunidades y la biodiversidad acuática. Además, la tala indiscriminada de árboles no solo contribuye a la deforestación, sino que también puede desencadenar deslizamientos de tierra y erosión del suelo.

Si algo es claro es que existe una conexión entre la seguridad ambiental, la degradación ambiental y el conflicto armado. El Gobierno nacional y las FF. MM. del país han aunado esfuerzos para propender por la seguridad ambiental en el territorio colombiano. Para implementar mecanismos que aporten a la seguridad ambiental, son indispensables la generación de normativa, la presencia de la Fuerza

Pública en las comunidades y la paz, ya que la existencia de grupos ambientales contra el delito dentro de todas las entidades armadas y de control civil resulta indispensable para proteger el medio ambiente, a fin de que se adelanten acciones jurídicas y se tenga interacción con las autoridades ambientales. De hecho, las acciones de las FF. MM. han mitigado acciones negativas sobre el medio ambiente.

La seguridad ambiental es imprescindible para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de un país. La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, como los bosques, son fundamentales para impulsar el desarrollo económico. La deforestación descontrolada puede llevar a la degradación del suelo, a la pérdida de biodiversidad y a la reducción de fuentes de ingresos sostenibles, lo que a largo plazo afectará de manera negativa la economía. La deforestación es una de las principales causas del cambio climático. Los bosques absorben dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera, y ayudan así a mitigar el calentamiento global. La pérdida de bosques contribuye a la acumulación de gases de efecto invernadero, lo que agrava el cambio climático. La seguridad ambiental implica proteger los bosques e implementar estrategias de gestión forestal sostenible para combatir el cambio climático.

Los bosques son hogar de una amplia variedad de especies y son considerados uno de los ecosistemas más diversos del planeta. La deforestación provoca la pérdida de hábitats, lo que lleva a la extinción de especies y afecta la biodiversidad global. Además, los bosques proporcionan servicios ecosistémicos vitales como la regulación del agua, la protección del suelo, la polinización y la producción de alimentos. La seguridad ambiental se centra en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales para garantizar estos servicios.

La seguridad ambiental también tiene un impacto directo en la salud humana. La deforestación puede aumentar la exposición a enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue, al destruir los hábitats de los vectores y alterar los ecosistemas. Además, los bosques actúan como filtros naturales del aire, lo cual ayuda a reducir la contaminación atmosférica y mejora la calidad del aire que respiramos.

La seguridad ambiental es decisiva para el desarrollo sostenible de un país. La protección de los recursos naturales —especialmente, los bosques— se vuelve esencial para abordar el cambio climático, conservar la biodiversidad, garantizar servicios ecosistémicos vitales y proteger la salud humana. La lucha contra la deforestación y la implementación de políticas y prácticas de gestión forestal sostenible son elementos clave para lograr la seguridad ambiental.

Referencias

- Arias, J. V. (2017). Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. *Investigación Agraria y Ambiental*, 1-22.
- Comisión de la Verdad. (2022). *Hay futuro si hay verdad : Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición*. Comisión de la Verdad. <https://www.comisiondelaverdad.co/sufrir-la-guerra-y-rehacer-la-vida>
- EFEverde. (2022). *Lazos de agua*. <https://efeverde.com/agua-colombia-fundacion-plan/>
- Gómez, N. J., & Velásquez, G. A. (2018). Asociación entre los espacios verdes públicos y la calidad de vida en el municipio de Santa Fe, Argentina. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 27(1), 164-179. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v27n1.58740>
- IDEAM. (2016). *Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables*. IDEAM.
- Indepaz. (2020). *Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia*. Indepaz. <https://tinyurl.com/2fwukbpb>
- Khagram, S., & Ali, S. (2006). Environment and security. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 31, 395-411.
- Kjelstad, B., & Puerta, F. (2019). Cómo la deforestación sirve al crimen organizado en Colombia. *Insight Crime*, 1-3. <https://tinyurl.com/3pz5ed7m>
- Lavaux, S. (2004). Degradación ambiental y conflictos armados: las conexiones. *Documento de investigación N° 7*. <https://tinyurl.com/y76szk2n>
- Llerena, H. T. (2016). Narcotráfico, insumos y medio ambiente: una visión ambiental desde la química al procesamiento de drogas ilícitas. *Gestión Ambiental*, 1-12.
- Méndez, F., & Zapata, A. (2021). Conflicto armado, contaminación y riesgos en salud: una evaluación de riesgo de tres fuentes de exposición ambiental asociados con el conflicto en Colombia. *Biomédica*, 1-11.
- Mosquera, N. G. (2018). *Efectos del conflicto armado sobre la calidad del agua en los municipios colombianos*. Universidad de los Andes.
- Organización de Naciones Unidas (ONU). (2005). *Evaluación de los Ecosistemas del Milenio*. <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf>
- Party, O. D. W. (2000). *State-of-the-Art review of environment, security and development Co-operation*. <https://tinyurl.com/4987pnb4>
- Quevedo, D., & Walteros, N. (2019). Derecho del Agua. En *El recurso hídrico en el conflicto armado en Colombia, y su relevancia en el proceso de posconflicto y construcción de paz* (tomo VIII). Universidad Externado de Colombia.
- World Wide Fund for Nature (WWF). (2022). *Aumento de la deforestación en Colombia en 2022*. <https://tinyurl.com/mrymd768>